



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

### SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPTE. NRO: 49103/2016

**AUTOS: “REGINALD LEE S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Buenos Aires,

### AUTOS Y VISTOS:

I. Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 175/185 contra la Resolución nro. 38/14 que desestima el recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada por la DV SSJA, obrante a fs. 120/129 que hizo lugar parcialmente a la impugnación presentada por los períodos 05/09 a 01/12 en cuanto corresponde detraer de la determinación efectuada, los montos correspondientes a la ANSSAL que ya fueron liquidados y abonados, ratificándose la determinación respecto de los conceptos reclamados y respecto del acta de infracción en cuanto corresponde readecuar la sanción aplicada a los dispuesto por el art. 8º de la Resolución General Nro. 1566 t.o 2010.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 39 bis inc. b) del Decreto Ley 1285/58, conf. Art. 26 de la ley 24.463

Que a fs. 272, el organismo de recaudación ordenó la remisión de los presentes obrados informando el incumplimiento del requisito de previo pago de la multa impuesta, en los términos del art. 15 de la ley 18.820.

II. Previo a tratamiento de la admisibilidad formal del remedio articulado, es menester señalar que el letrado apoderado de la contribuyente a fs. 290/293, introdujo planteo inhibitoria, no obstante haber ajustado su actuación al procedimiento previsto en la normativa más arriba referida, pues, paralelamente se entabló una acción declarativa de certeza ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes que admitió la demanda promovida.

Que por sentencia interlocutoria del 20 de marzo de 2023 –de conformidad con lo dictaminado por el Representante del Ministerio Público-, el Tribunal desestimó su pretensión. Para decidir de ese modo, se tuvo en cuenta que el proceso determinativo de deuda es anterior a la acción declarativa de certeza denunciada consolidando el procedimiento a seguir; asimismo, se sostuvo que la legislación aplicable no da posibilidad de opción para la impugnación. Ello así pues la determinación de deuda es un procedimiento íntegramente reglado y no discrecional dado que su desenvolvimiento no depende de ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia. Las reglas de actuación determinativa no dan opción o libertad de elección entre varios resultados posibles. A lo que se agregó que el obrar reglado por la RG 79/98 y el art. 26 de la ley 24.463 es de obligatorio seguimiento y no resulta atendible siquiera la apertura de concurso preventivo.

Desestimada la aclaratoria deducida y determinada que fuera la tasa de justicia se giran los autos a sentencia, En este estado, el contribuyente en fecha 11 de agosto de 2023, plantea hecho nuevo. En esta oportunidad hace saber al tribunal que la Cámara Federal de La plata confirmo la sentencia del Juzgado Federal de Quilmes, resolución que ha quedado firme a consecuencia del rechazo del Remedio Federal deducido por AFIP en virtud de lo dispuesto por el artículo 280 del Código de Rito, lo cual, según su opinión, haría cosa juzgada sobre la cuestión litigiosa y al Tribunal no le cabría más que admitir “directamente el recurso de apelación, revocando la resolución administrativa recurrida y manifiestamente nula.”.

No resulta ocioso destacar que el voto que conforma la mayoría de la sentencia que pretende hacer valer el contribuyente, en modo alguno determina la nulidad de la resolución aquí controvertida, sino que expresamente se limita el alcance de la decisión “... respecto de la incertidumbre planteada en cuanto al derecho invocado por las partes, sin entrar en el análisis de las actuaciones administrativas acompañadas ni en la determinación de deuda efectuada por la AFIP, que son cuestiones de hecho ajenas a la acción declarativa de certeza”.

En este contexto, firme y consentido que ha sido el rechazo de la inhibitoria planteada, no cabe más que desestimar la denuncia de hecho nuevo y abordar el tratamiento del recurso de apelación deducido en fecha 7 de abril de 2014, a la luz de las disposiciones que regulan el proceso de impugnación de deudas y sanciones.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

III. Que despejados los óbices trazados por el apelante, respecto de la admisibilidad formal del remedio sujeta al pago previo de la deuda; la aquí accionante, en su escrito recursivo, plantea la sustitución del depósito por una caución real y embargo de bienes inmuebles “de relevante valor económico”, al tiempo que esgrime la exorbitancia del monto liquidado.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

En el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que en consecuencia en tanto en el sub examine no se han objetivado los supuestos que autorizarían eximir al recurrente del depósito previo exigido por los art. 15 de la ley 18.820 y 39 bis del decreto ley 1285/58 sustituido por el art. 26 de la ley 24.463, como requisito para la admisibilidad del recurso deducido, corresponde declarar la inadmisibilidad formal el remedio procesal intentado en virtud de no haberse cumplido lo dispuesto por la normativa legal citada.

Que no obsta lo expuesto el ofrecimiento de caución real pues, de acuerdo a la línea jurisprudencial trazada y tal como lo viene manifestando esta Sala desde la opinión sentada in re "STEFANI, OSCAR RODOLFO c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda", 16/02/05, Boletín de Jurisprudencia de la C.F.S.S. n° 41, el título de propiedad de un inmueble, acompañado con la finalidad de que se trabé embargo sobre el mismo, resulta una documentación manifiestamente improcedente para tener por cumplido el depósito que exige el art. 15 de la ley 18.820, por cuanto este requisito sólo sede ante los supuestos previstos por la doctrina de la C.S.J.N..

Asimismo, no resulta acreditada en autos la comprometida situación financiera de la empresa, esgrimida a fs. 178, dado que en apoyo de tal afirmación se acompañan copias de D.J. 931, 731 y 770 correspondientes sólo al período fiscal 02/14, sin aportar otros elementos (balances de ejercicios anteriores) que den cuenta de la situación que se pretende justificar.

Por lo expuesto y de conformidad en lo pertinente con dictaminado por el Representante del Ministerio Público, el Tribunal **RESUELVE**: 1) Declarar formalmente ~~inadmisible el recurso interpuesto; y 2) sin costas en la Alzada. Por disposición del Tribunal,~~

Fecha de firma: 29/02/2024

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#28546140#400668487#20240222115828560



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.).  
Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.  
**Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).**

